

Esta es una traducción Libre:

Realizada con base un archivo allegado y anotaciones de Juan Fernando Mejía.
No compromete la opinión de la fuente ni de las organizaciones en la cuáles tiene alguna relación.

Informe sobre Observancia de Códigos y Normas (ROSC)

Componente de Contabilidad y Auditoria

Colombia

25 de julio de 2003

Índice

Resumen Ejecutivo

- I. Introducción
- II. Marco institucional
- III. Definición y aplicación de las normas de contabilidad
- IV. Definición y aplicación de las normas de auditoría
- V. Cómo se percibe la calidad de la información financiera
- VI. Recomendaciones de políticas

Resumen ejecutivo

En el pasado reciente el gobierno colombiano, con la anuencia del Congreso, ha emprendido nuevas estrategias tendientes a adelantar reformas económicas estructurales, obtener una estabilidad macroeconómica, reformar las entidades reguladoras y sistemas de control, y mejorar la situación de orden público. Una de las reformas propuestas por el gobierno contiene un proyecto para mejorar el régimen de información financiera de las sociedades. El proyecto incluye la promulgación de una nueva ley, orientada a reformar y desarrollar la profesión contable, adoptando plenamente los Estándares Internacionales de Contabilidad (EIC) y los Estándares Internacionales de Auditoría (EIA), aplicando las mejores prácticas internacionales respecto a un código de ética para los contadores profesionales y creando un programa internacionalmente equiparable para la licencia de ejercicio de los contadores públicos titulados.

El presente informe se preparó con base en los resultados de un estudio sobre las normas y prácticas contables y de auditoría que se aplican en Colombia. El estudio se centró principalmente en las fortalezas y debilidades del marco institucional que sirve de soporte al sistema de presentación de información financiera de las sociedades en el país. Los actuales requisitos legales y reglamentarios sobre contabilidad han llevado a la expedición de normas contradictorias, originadas en múltiples fuentes. Las disposiciones legales que les otorgaron a diversos organismos reguladores la facultad de determinar los requisitos contables para las entidades bajo su jurisdicción han dado pie a una práctica de presentación de informes financieros con fines específicos. En realidad no hay un concepto operativo respecto a los informes financieros con fines generales. Sin embargo, los requisitos legislativos sobre auditoría riñen con el concepto moderno de auditoría de los estados financieros. En realidad no existe un requisito de auditoría externa para los

estados financieros en Colombia. Hay tantos inconvenientes en la capacidad y regulación de la profesión contable que ésta, en su estado actual, no puede servir de base para una auditoría independiente de los estados financieros.

El presente informe ofrece recomendaciones para el mejoramiento de las prácticas contables y de auditoría, entre ellas el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento obligatorio de las normas, a fin de garantizar la conformidad con los requisitos contables y de auditoría y un código de ética profesional para los auditores. En este contexto se recomienda establecer un organismo regulador estatutario pertinente. Otras recomendaciones de política conciernen la creación de un Consejo Superior encargado de emitir estándares contables y de auditoría como requisitos obligatorios al nivel local para las entidades de interés público; la instauración de una nueva organización profesional de auditores de estados financieros; la reforma del programa académico universitario de contaduría, mejoras significativas en la capacidad docente de los profesores de contaduría de las universidades y la organización de programas de capacitación sobre aspectos prácticos de los EIC y los EIA para contadores, auditores y terceros.

I. Introducción

1. El estudio de las prácticas contables y de auditoría en Colombia forma parte de la iniciativa conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) relacionada con los Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC). El estudio, que se centró en las fortalezas y debilidades del medio contable y de auditoría que inciden en la calidad de los informes financieros de las sociedades, abarcó tanto los requisitos como las prácticas tal como se aplican en la realidad. Para ello utilizó como documentos de referencia las Estándares Internacionales de Contabilidad (EIC)¹ y las Estándares Internacionales de Auditoría (NIA).

2. Colombia cuenta con una abundancia de recursos minerales y agrícolas, una fuerza laboral culta y calificada, una moderna economía industrial y de consumo y un sistema político democrático. En el país hay más de 400 empresas multinacionales con negocios prósperos en expansión, pese a la presencia de movimientos insurgentes y de un conflicto armado. De las 139 compañías que figuran en la Bolsa de Valores de Colombia, 109 emiten acciones e instrumentos crediticios y 30 de ellas emiten sólo estos últimos. El volumen de transacciones diarias es de aproximadamente USD 2 millones, con una capitalización total de alrededor de USD 17 mil millones; sin embargo, la liquidez del mercado es motivo de preocupación. La recesión de 1997 a 1999, que surgió después de más de 40 años de crecimiento uniforme del país, fue la peor en 70 años. Aunque la economía colombiana recibió un duro golpe, actualmente muestra una gran recuperación.

3. A pesar de sus problemas, Colombia mantiene una clasificación robusta entre los países comprometidos con la implementación de las mejores prácticas internacionales para reforzar los fundamentos de sus economías de mercado. Con el fin de reactivar la economía, lograr la confianza pública en los mercados de capitales y atraer a inversionistas nacionales y extranjeros, el gobierno actual, con la anuencia del Congreso,

¹ El término Estándares Internacionales de Contabilidad que se utiliza en este informe se refiere a todas las normas, y a sus correspondientes interpretaciones, expedidas por el antiguo Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASC, por su sigla en inglés) y por las Estándares Internacionales de Información Financiera – (NIIF) y las respectivas interpretaciones emitidas por el organismo sucesor de la IASC, el Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).

ha emprendido nuevas estrategias para adelantar reformas económicas estructurales y obtener una estabilidad macroeconómica, reformar las instituciones reguladoras y los sistemas de control, y mejorar el orden público. Una de las reformas propuestas por el gobierno es un proyecto para mejorar el régimen de información financiera de las sociedades. El proyecto comprende la promulgación de una nueva ley destinada a reformar y desarrollar la profesión contable, adoptando plenamente las Estándares Internacionales de Contabilidad y las Estándares Internacionales de Auditoría, aplicando las mejores prácticas internacionales en un código de ética para los contadores profesionales y estableciendo un programa internacionalmente equiparable para la licencia de ejercicio de los contadores públicos titulados.

II. Marco Institucional

A. Marco legal

4. Los requisitos jurídicos y legales del país, en lo referente a la contabilidad, no conducen a una práctica de presentación de informes financieros de alta calidad. Aunque Colombia cuenta con múltiples fuentes de normas y reglas sobre contabilidad establecidas en la ley, algunos de los requisitos contables riñen entre sí. **Por consiguiente, quienes elaboran y auditan los informes se enfrentan a confusiones en el momento de aplicar los tratamientos contables específicos y de cumplir las obligaciones de divulgación,** por lo cual la calidad de los estados financieros se ve afectada en forma negativa. Los requisitos legales sobre la práctica contable se encuentran en: (a) el Código de Comercio, que estipula los requisitos de la contabilidad general que deben observar las sociedades en cuanto a la teneduría de libros contables, los registros de las transacciones y la preparación de los estados financieros; (b) la ley 43 de 1990, que dispone un marco legal general que autoriza al gobierno a expedir normas pormenorizadas sobre la contabilidad y la auditoría en Colombia, así como a regular la práctica de la contaduría pública como profesión y (c) el decreto 2649, que promulga los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA colombianos). Además de estas fuentes de requisitos contables, diversos organismos gubernamentales y entes reguladores expiden el Plan de Cuentas y las instrucciones contables. La ley 222 de 1995 facultó a algunos organismos reguladores², así como a otras entidades gubernamentales, a expedir normas contables para las entidades bajo su supervisión. La Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Valores (que regula el mercado bursátil) y la Superintendencia Bancaria (que regula a los bancos, a las compañías de seguro y a los fondos de pensiones) son los organismos más activos en la expedición de normas contables.

5. Las normas contables emitidas por las autoridades tributarias influyen en las políticas contables que se utilizan en la preparación de los estados financieros anuales auditados con destino a los usuarios externos. La ley 222 de 1995 confiere autoridad legal para emitir normas contables a la entidad recaudadora de impuestos, denominada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Debido a que las autoridades tributarias fiscalizan si los entes, que registran y presentan información financiera específica, observan sus normas contables, la contabilidad de base tributaria desempeña un papel primordial en la preparación y auditoría de los estados financieros anuales de una empresa. Dado que ciertas transacciones se registran en los libros de cuentas utilizando una base tributaria, esto afecta la información presentada en los estados financieros anuales auditados. Infortunadamente, las normas contables tributarias

² Conocidos como Superintendencias.

no suelen ser consistentes con los PCGA colombianos, como tampoco con los principios de contabilidad aceptados a nivel internacional. En muchos casos las normas contables tributarias exigen un tratamiento contable que riñe con los requisitos de presentación de informes financieros en áreas tales como el costeo de inventarios y la valoración de éstos según el método minorista, la contabilización del arrendamiento financiero, la depreciación de activos fijos, la provisión para cuentas de difícil cobro y los ajustes por inflación. Para no dar lugar a diferentes opiniones o malentendidos con las autoridades tributarias, tanto quienes preparan como quienes auditan dichos estados financieros tienden a favorecer las políticas contables que se han usado para determinar las utilidades gravables (es decir los criterios o bases comprensivas de carácter tributario o de vigilancia, inspección o control). Como consecuencia de ello, los usuarios de los estados financieros quizá no siempre encuentren en los estados financieros divulgados públicamente, una información orientada hacia el mercado.

6. A los bancos se les exige observar los mismos normas y reglas contables tanto en la presentación de informes con regulación prudencial como en los informes financieros destinados a usuarios externos. En el caso de la regulación prudencial de los bancos, la Superintendencia Bancaria emite reglas contables, métodos de valoración y requisitos de divulgación específicos, que son aplicables no solamente a los efectos reguladores de la presentación de los informes, sino también para efecto preparación de estados financieros de uso general. A las compañías aseguradoras se les exige cumplir los requisitos contables expedidos por la Superintendencia Bancaria en virtud de la ley 510 de 1999.

7. Varias leyes disponen la preparación y presentación de estados financieros anuales consolidados auditados. El Código de Comercio y la ley 222 de 1995 les exigen a las sociedades que sean propietarias de más del 50 por ciento del capital de otras sociedades, que preparen estados financieros consolidados, en conformidad con los PCGA colombianos. La Superintendencia Bancaria expidió la Circular No. 100, en la que se les exige a los bancos la preparación de estados financieros consolidados. La Superintendencia de Valores, por su parte, promulgó la Circular No. 1 de 1996, que les exige a las compañías que cotizan en bolsa la preparación de estados financieros consolidados. Debido a las deficiencias de los requisitos legislativos, en la práctica los bancos no consolidan los estados financieros de las subsidiarias no bancarias y viceversa.

8. Para las compañías que cotizan en bolsa hay requisitos adicionales de presentación de informes a la Superintendencia de Valores. A la Superintendencia de Valores se le deben presentar estados financieros consolidados trimestrales, los cuales deben incluir las correspondientes notas y la opinión del auditor, a más tardar 30 días después de finalizado el período—salvo en el período que termina en diciembre, cuyo informe se debe presentar a más tardar el 1º de marzo del año siguiente. La Superintendencia de Valores debe también recibir, en el formulario indicado, la información referente a cambios ocurridos en las políticas contables; cambios en los montos reportados en estados financieros anteriores; cambios significativos en los activos; cambios importantes en los componentes del capital; pagos de dividendos; reestructuración de los pasivos; cambio de auditor y cualquier reorganización, fusión o adquisición que haya emprendido la sociedad.

9. Las sociedades comerciales que cumplen con ciertos criterios están obligadas legalmente a nombrar un revisor fiscal que lleve a cabo la auditoría anual.³ La mayor parte de las sociedades comerciales cumple con estos criterios. El artículo 203 del Código de Comercio y el artículo 13 de la ley 43 de 1990 establecen los siguientes criterios para determinar los umbrales obligatorios para la auditoría anual: todas las sociedades que cotizan en bolsa; las subsidiarias de las empresas comerciales extranjeras; las personas jurídicas en las que no todos los propietarios participen en la gerencia y donde los propietarios no participantes tengan por lo menos el 20 por ciento del capital, y todas las demás entidades comerciales cuyos activos al 31 de diciembre del año anterior sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos y/o cuya renta bruta del año inmediatamente anterior sea igual o superior a 3.000 salarios mínimos.⁴ El artículo 20 de la ley 45 de 1990 exige el nombramiento de un revisor fiscal a todas las empresas supervisadas por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores; asimismo, hay más de 20 leyes adicionales que exigen el nombramiento de un revisor fiscal a determinado tipo de sociedades. El artículo 204 del Código de Comercio dispone el nombramiento del revisor fiscal por mayoría de votos de los accionistas en la asamblea general anual. La ley estipula que las funciones de revisor fiscal las cumpla un contador público que sea persona natural y establece que ninguna persona natural puede actuar como revisor fiscal de más de cinco compañías al mismo tiempo. Si se nombra como revisor fiscal a una firma de contaduría pública, se debe designar a un socio o empleado de la empresa que se encuentre legalmente calificado para cumplir personalmente con la función de revisor fiscal. El período del nombramiento del revisor fiscal es de la misma duración que el de la junta directiva, a menos que el revisor fiscal sea retirado de su cargo antes de llegado el término del mencionado periodo por mayoría simple de votos de los accionistas.

10. Las funciones del revisor fiscal no son compatibles con las de un auditor de estados financieros independiente. En Colombia, el concepto moderno de la auditoría independiente no aparece en las disposiciones legales sobre auditoría. Las leyes le exigen al revisor fiscal realizar múltiples actividades, de las cuales sólo una es la de emitir su opinión sobre los estados financieros. Las leyes y reglamentos vigentes estipulan que un revisor fiscal certifique la eficacia del control interno de la empresa—en esta forma, el auditor se hace prácticamente responsable del control interno del cliente. Al revisor fiscal se le exige, de igual manera, salvaguardar los activos de la empresa y cerciorarse de que todas las obligaciones de ésta con los diferentes entes gubernamentales (incluida la administración de impuestos) se cumplan de manera oportuna. El gobierno le ha delegado al revisor fiscal la responsabilidad de controlar y analizar las operaciones de la empresa, así como la de ejercer las labores de vigilancia e inspección de todas sus transacciones. Así pues, en realidad, le exige a un auditor de la empresa que desempeñe las funciones de contralor, las cuales deberían ser responsabilidad de la gerencia. Estas actividades son contrarias a la independencia del auditor externo, tal como lo especifican las reglas de independencia del auditor promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

³ Algunas personas denominan “auditor estatutario” (“*statutory auditor*”) al revisor fiscal. Según la práctica aceptada internacionalmente, el término “auditor estatutario” se refiere a los auditores independientes que auditan estados financieros. Dado que la ley le exige al revisor fiscal el desempeño de diversas actividades diferentes a las de la auditoría de estados financieros, en el presente informe se utiliza el término revisor fiscal para denotar a los profesionales dedicados a las auditorías anuales exigidas por la ley en Colombia.

⁴ El gobierno determina el salario mínimo (*al ingreso producto de la actividad laboral que una persona económicamente activa puede recibir como mínimo durante un mes*)

11. La ley hace responsables a la gerencia y a la junta directiva de la empresa de cualquier falsedad en documento que presenten los estados financieros. La ley 222 de 1995 pone de relieve la responsabilidad que tiene la gerencia de una sociedad, pero no establece sanciones ni penalidades por el incumplimiento de las normas y reglas obligatorias de contabilidad y presentación de informes financieros. Aunque la legislación vigente les permite a los accionistas y propietarios entablar acciones legales contra la gerencia en un tribunal civil, esto rara vez ocurre.

12. Los estados financieros anuales auditados de una persona jurídica deben ser aprobados en la asamblea general de socios. El Código de Comercio estipula que los estados financieros anuales de todas las personas jurídicas deben ser aprobados en la asamblea anual de accionistas. El artículo 84 de la ley 222 de 1995, ratificado por el decreto 3100 de 1997, les exige a todas las personas jurídicas comerciales presentar a la Superintendencia de Sociedades un conjunto completo de estados financieros anuales auditados. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 41 de la ley 222 de 1995, a todas las personas jurídicas comerciales se les exige presentar sus estados financieros anuales auditados a la Cámara de Comercio de la jurisdicción en la que se encuentre registrada la sociedad.

13. A las sociedades se les exige publicar un balance general anual y un estado de ingresos y egresos anuales en un periódico de circulación nacional. Tanto la Superintendencia Bancaria como la Superintendencia de Valores les exigen a estas empresas la publicación de un balance general y un estado de ingresos y egresos, sin anotaciones explicativas, en uno de los diarios de mayor circulación del país, a más tardar 10 días después de su aprobación por parte de la asamblea general de accionistas. El hecho de que no se publiquen las anotaciones explicativas de soporte puede dar lugar a que los usuarios malinterpreten o malentiendan las cifras consignadas en dichos informes. Al lector no se le advierte acerca del carácter resumido de la información que aparece en documentos publicados. Para obtener un entendimiento completo de la posición financiera de la empresa y del resultado de sus operaciones, la información publicada se debería leer simultáneamente con un conjunto completo de estados financieros auditados (que incluyan todas las divulgaciones exigidas en el marco regulatorio pertinente de presentación de informes financieros). Recientemente la Superintendencia de Valores emitió un fallo que les exige a las empresas reguladas presentar un juego completo de estados financieros adecuado para su publicación en el sitio web en la Superintendencia. Hasta el momento las empresas no han cumplido con este requisito.

14. La ley 43 de 1990 autorizó crear la Junta Central de Contadores (JCC), dependiente del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es regular el ejercicio de la contaduría y la auditoría en Colombia. La decisión de dejar a la JCC bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación refleja el hecho de que un grado académico, sin importar cuál sea su calidad, constituye un salvoconducto de entrada a la profesión; de otro lado, para inscribirse como contador público no se requiere ningún otro tipo de idoneidad profesional adicional. La contaduría en Colombia parece ser más una profesión que se obtiene mediante acreditación que una profesión de ejercicio debidamente autorizado, y el enfoque regulatorio se centra más en el ingreso a la profesión que en el desempeño en la misma después de su admisión en ella. La JCC mantiene un registro de contadores públicos y goza de la facultad de imponer sanciones a los contadores públicos registrados que violen los requisitos en materias contables y de auditoría. Sin embargo, en la práctica, esta entidad no cuenta con un mecanismo de vigilancia que haga cumplir estos requisitos.

B. La profesión de contador

15. La Junta Central de Contadores carece de capacidad suficiente para operar como un ente regulador eficaz de la profesión contable. La Junta está compuesta por 11 miembros nombrados: 7 representantes del gobierno, 2 de los contadores públicos y 2 de las universidades. En 2002 la JCC examinó 174 casos de posibles violaciones a los reglamentos de contabilidad y auditoría por parte de los contadores públicos registrados, pero sólo a 2 de ellos se les aplicaron sanciones reales. La JCC cuenta con un presupuesto deficiente y se le considera incapaz de cumplir las funciones que le ha impuesto la ley.

16. Debido a que es fácil el ingreso a la profesión de contador, en Colombia hay una gran cantidad de contadores públicos registrados. Los exámenes de idoneidad profesional no son un requisito previo para el registro como contador público. La JCC expide una licencia de Contador Público a los solicitantes que hayan obtenido un título universitario en contaduría y que hayan comprobado un año de experiencia en trabajos relacionados con la práctica contable después de graduados. Los solicitantes no necesitan haber recibido capacitación práctica bajo la supervisión de un contador público competente. A un contador público registrado que no haya tomado el examen de idoneidad profesional o no haya obtenido una experiencia profesional pertinente se le permite trabajar en calidad de revisor fiscal de empresas de cualquier tipo o tamaño, entre ellas compañías anónimas y bancos, así como otras instituciones financieras semejantes, como las compañías de seguros. En la práctica, en Colombia muchos contadores públicos inician su carrera profesional con conocimientos y habilidades profesionales insuficientes. En el momento hay alrededor de 110.000 contadores públicos registrados, y se espera que en los próximos cinco años 100.000 o más obtengan su licencia de ejercicio. De acuerdo con la Cámara de Comercio Nacional, la oferta de contadores públicos registrados en Colombia supera la demanda en aproximadamente el 100 por ciento.

17. En Colombia hay más de 120 asociaciones de contadores. Los estudiantes universitarios que buscan pertenecer a la profesión contable se afilian a una de las asociaciones de contadores y continúan afiliados a lo largo de su carrera profesional. Estas asociaciones pertenecen a una de las dos organizaciones principales del nivel nacional que actúan como entidades gremiales—la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos y la Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos. Otra de las organizaciones que congrega al gremio de contadores es el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP). Este lleva 50 años de fundado y es miembro, a su vez, de la IFAC. Cuenta con 700 miembros, que incluyen a las firmas más grandes de contaduría, junto con sus empleados y socios.

18. La ley no les exige a los auditores un seguro de indemnización profesional. El seguro de indemnización profesional está disponible en Colombia por medio de las compañías aseguradoras; sin embargo, pocos auditores, distintos a los de las grandes empresas de contaduría, suscriben tal seguro. Aunque hay una disposición legal que especifica las responsabilidades (de tipo contractual, civil y/o penal) del auditor respecto a ciertas conductas indebidas en el desempeño de sus responsabilidades profesionales, esta disposición aún no se ha puesto a prueba en la práctica.

19. A los contadores públicos registrados no se les exige seguir un código de ética comparable al de la IFAC. Los requisitos referentes a la ética profesional se encuentran en algunos artículos de la ley 43 de 1990, pero no incluyen lineamientos sobre los

principios de independencia de la actividad contable. Existe una gran brecha entre estos requisitos y las disposiciones del Código de Ética para Contadores Profesionales de la IFAC (modificado en noviembre de 2001). Dado que los requisitos están incorporados en la ley, es difícil actualizarlos para que reflejen los cambios ocurridos en el Código de la IFAC. Resultaría fácil reducir la mencionada brecha si la ley facultara a un determinado organismo para expedir un código de ética de obligatorio cumplimiento por parte de todos contadores públicos registrados. Aunque el Instituto Nacional de Contadores Públicos adoptó recientemente el Código de la IFAC para sus miembros, su acatamiento es voluntario.

C. Educación y capacitación profesionales

20. El programa de estudios académicos de contaduría se debe reformar para facilitar la implantación de estándares de alta calidad en las prácticas de contabilidad y auditoría. La enseñanza universitaria de contaduría y auditoría se concentra en los requisitos legales y en las técnicas necesarias para la teneduría de libros y la presentación de informes destinados a cumplir con las obligaciones de la administración de impuestos y de otras autoridades legales. Los programas de auditoría se concentran en las obligaciones legales del revisor fiscal, entre ellas las técnicas de verificación de auditoría, el análisis de todas las transacciones desde el punto de vista del control financiero y las diversas labores requeridas para el cumplimiento de las leyes, que el revisor fiscal debe realizar en nombre de la gerencia de la empresa. En la actualidad los programas académicos de contaduría se orientan más a producir técnicos que contadores y auditores modernos. Como lo comentaba un profesor universitario: “Nos dedicamos más a enseñar teneduría de libros que contaduría”. El programa de estudios universitarios debería cubrir teorías y prácticas modernas de contabilidad y auditoría, así como de una aplicación práctica de los EIC y los EIA y de los aspectos relacionados con la ética empresarial.

21. Se debe mejorar en forma significativa la calidad de la enseñanza de la contaduría y la auditoría. De las 120 instituciones de educación superior que ofrecen un título universitario en contaduría, sólo 4 programas se consideran de alta calidad. La escasez de profesores idóneos de contaduría contribuye al deterioro de la calidad de la enseñanza contable en Colombia. Muchos de los instructores de contaduría y auditoría carecen de conocimientos suficientes de las teorías y prácticas modernas; así pues, hay asignaturas importantes que, o bien se enseñan de manera deficiente o no se enseñan. Por otra parte, en las instituciones de educación superior colombianas hay carencia de capacidad en lo relacionado con la enseñanza de la aplicación práctica de las normas de contabilidad y auditoría del IASB y la IFAC.

22. Una experiencia práctica adecuada debe ser un requisito previo para obtener el certificado de ejercicio profesional. La falta de requisitos sobre experiencia práctica en conformidad con los pronunciamientos de la IFAC sobre educación y capacitación profesionales ha contribuido al debilitamiento de la profesión de contador en Colombia. Es preciso que un candidato a contador adquiera una experiencia práctica suficiente, bajo la supervisión directa de un miembro experimentado de la agremiación profesional. Se deben tomar medidas que aseguren que quienes prestan los servicios de capacitación práctica se encuentren dotados de una capacidad adecuada para ayudar a los aspirantes a aprender las dimensiones prácticas de las normas y procedimientos de auditoría internacionalmente aceptados.

23. A los contadores públicos licenciados no se le exige emprender una educación profesional continuada. Al contrario de lo que indican los pronunciamientos de la IFAC y las mejores prácticas internacionales generalmente aceptadas, a quienes ejercen la actividad contable y de auditoría en Colombia no se les obliga a emprender una educación profesional continuada. Esta debilidad subraya las deficiencias del sistema de formación y capacitación profesional del país.

D. Establecimiento de normas de contaduría y auditoría

24. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, solamente el Congreso está revestido de la autoridad para expedir principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). El Congreso puede delegar esta autoridad a la rama ejecutiva y a otras instituciones mediante una ley. El Presidente de la República promulgó el decreto 2649 de 1993, que estableció a los PCGA colombianos. De igual manera, mediante la ley 222 de 1995, el Congreso autorizó a algunos organismos gubernamentales y entes reguladores para que emitieran las normas contables necesarias para el desarrollo de sus propias funciones reguladoras. En el momento hay aproximadamente 43 conjuntos diferentes de estándares contables en Colombia, incluidos los expedidos por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores.

25. Los PCGA colombianos fueron elaborados por el Consejo Técnico a principios de los años 1990, con base en los PCGA de Estados Unidos y las Estándares Internacionales del Contabilidad. La ley 43 de 1990 creó el Consejo Técnico de la Contaduría, bajo la autoridad de la Junta Central de Contadores, para que expidiese orientación Técnica sobre estándares contables. El Consejo elaboró una serie de principios de contabilidad que se denominaron PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) colombianos. El decreto 2649 de 1933 los definió como las normas de contabilidad para todas las empresas de Colombia. Los PCGA colombianos no fureon consistentes ni con los PCGA de Estados Unidos ni con otros estándares internacionales. Por ejemplo, varias áreas de las normas contables que ocupan de manera pormenorizada un número extenso de hojas en los PCGA de Estados Unidos o los EIC, se redujeron en los PCGA colombianos a simples disposiciones básicas descritas en breves párrafos, sin ninguna orientación sustancial. La divulgación de los informes es un tema que no recibió ninguna mención en los PCGA colombianos. El Consejo Técnico no ha actualizado los PCGA colombianos para reflejar los cambios ocurridos en los PCGA de Estados Unidos y los EIC desde 1993.

26. En Colombia no hay normas de auditoría sobre estados financieros que sean de obligatorio cumplimiento. La ley 43 de 1990 le exige al revisor fiscal llevar a cabo su labor en conformidad con los PCGA colombianos, pero no especifica ninguna otra clase de normas o procedimientos de auditoría. Les dedica solamente una página de orientación general a los requisitos de auditoría. La ausencia de normas de auditoría para el control de los estados financieros refleja el hecho de que la ley colombiana sólo reconoce la labor del revisor fiscal. No hay ninguna opinión de auditoría independiente respecto a los estados financieros. Tampoco se ha promulgado todavía ninguna ley destinada a modernizar el marco legal en lo referente al desarrollo y expedición de normas de auditoría.

E. Control de la aplicación de los estándares de contaduría y auditoría

27. Los entes reguladores se dedican más a expedir normas de contabilidad que a hacerlas cumplir. Los organismos reguladores carecen de la capacidad para vigilar el acatamiento de los requisitos contables y de información financiera, y no han puesto en práctica un mecanismo eficiente ni eficaz de supervisar y hacer cumplir los requisitos de contabilidad y auditoría. En la Superintendencia de Sociedades hay un departamento encargado de revisar los estados financieros presentados por todas las personas jurídicas comerciales del país. En la práctica, los revisores rara vez identifican infracciones reales a los requerimientos contables y de presentación de informes. Además, nunca imponen medidas destinadas a hacer cumplir eficazmente las normas. Los demás entes reguladores por lo general utilizan sus recursos para vigilar el cumplimiento de los trámites legales, más que para examinar las prácticas de presentación de informes financieros con el fin de determinar el incumplimiento de las normas y reglas vigentes.

28. Las entidades reguladoras del mercado de valores y de las instituciones financieras en ocasiones consideran a las infracciones en contra de los requisitos de contabilidad y auditoría como actividades secundarias de supervisión y control del cumplimiento de obligaciones prudenciales. En su tarea de supervisar y vigilar el acatamiento de la regulación prudencial por parte de los bancos, compañías aseguradoras y fondos de pensiones, los inspectores de la Superintendencia Bancaria toman medidas cuando descubren que se presentan violaciones a los requisitos de contabilidad y auditoría. Los funcionarios de la Superintendencia de Valores toman medidas similares cuando encuentran infracciones a los requisitos de contabilidad y auditoría en el curso de su actividad de vigilancia del mercado y otras actividades de supervisión. La Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores se encuentran autorizadas por la Ley Bancaria y la Ley de Valores, respectivamente, para imponer sanciones administrativas contra los infractores, que incluyen desde sanciones monetarias hasta la suspensión o inhabilitación de asesores y auditores. En la práctica, cuando las entidades reguladoras descubren errores materiales o infracciones, el procedimiento estándar consiste en acordar una reunión con el revisor fiscal y solicitar las correcciones a los estados financieros, sin proceder a investigar la naturaleza, extensión o impacto de dichos errores o infracciones. En raras ocasiones se toman medidas punitivas; la sanción más drástica hasta la fecha ha sido la expedición de una carta de amonestación.

29. No hay ninguna organización encargada de asegurarse que los auditores en ejercicio observen unas normas de auditoría de alta calidad ni el código de ética profesional. El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, al igual que otras organizaciones profesionales de orden nacional, no cuenta con un mecanismo que garantice el cumplimiento de ninguna norma de auditoría ni código de ética por parte de sus miembros. La ley no ha establecido aún un organismo regulador estatutario que revise las prácticas de los auditores y haga cumplir los requisitos de la auditoría.

III. DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD

30. Los PCGA colombianos promulgados en el decreto 2649 de 1993 tienen la condición de normas de contabilidad nacionales. Las reglas de contabilidad emitidas por diversos entes reguladores tienen como finalidad el complementar los PCGA colombianos. No obstante, en la práctica, las entidades reguladoras han expedido

múltiples normas contables que contradicen los requisitos establecidos por los PCGA colombianos, lo cual ha significado varios inconvenientes para los elaboradores y usuarios de los estados financieros. El más frecuente de estos inconvenientes, que no es exclusivo de Colombia, es la influencia omnipresente de las autoridades de impuestos en la elección y aplicación de los principios contables. El problema se agrava aún más con la tendencia de los entes reguladores y gubernamentales de expedir normas de contabilidad que generan confusión para quienes preparan y utilizan la información financiera, y que deterioran no sólo la transparencia de los estados financieros sino también su utilidad en cuanto a su orientación al mercado.

31. Entre los PCGA colombianos y los EIC se presentan muchas diferencias. Los primeros no incorporan muchas de las áreas que cubren las segundas. Por otra parte, los PCGA colombianos no se han actualizado para reflejar los requisitos de los EIC desde 1993, cuando se promulgó el decreto 2649. Más aún, dado que los PCGA colombianos sólo cubren brevemente ciertos asuntos complicados de la contabilidad, las diferentes partes interpretan los requisitos contables y de presentación de informes en diferentes formas, lo cual agrava la gran brecha que hay entre los PCGA colombianos y los EIC. A continuación se describen ejemplos de algunas de las diferencias que se observan en los PCGA colombianos:

- Carecen de principios rectores sobre valoración de inventarios y su correspondiente divulgación;
- No mencionan la contabilización de los contratos de construcción;
- Ofrecen enfoques contradictorios respecto al reconocimiento de los impuestos diferidos;
- No cubren requisitos de presentación de informes de segmentos (de la empresa) y
- Carecen de reglas de contabilidad claramente definidas y de requisitos de divulgación detallados en otras áreas tales como los contratos de arrendamiento financiero, las prestaciones sociales de los empleados, las transacciones y conversiones en moneda extranjera, las combinaciones de negocios, las inversiones en empresas asociadas y de riesgo compartido, las utilidades por acción, las reservas y contingencias, y los instrumentos financieros.

32. También hay diferencias entre los PCGA colombianos y las reglas de contabilidad expedidas por el ente regulador bancario. Los siguientes son algunos de los requisitos promulgados por la Superintendencia Bancaria que riñen con los requisitos del decreto 2649 (PCGA colombianos):

- Los ajustes por inflación se derogaron a partir del 1º de enero de 2001.
- Las subsidiarias no financieras no se deben consolidar con las subsidiarias financieras.
- En la contabilización de los arrendamientos financieros se deben observar las normas tributarias.
- Se deben seguir métodos específicos para el reconocimiento, medición y divulgación de los instrumentos financieros.
- En la contabilización de las inversiones se debe utilizar el método del valor justo.
- En circunstancias limitadas se permite contabilizar impuestos diferidos.
- Los gastos de deben diferir en ciertas circunstancias.

33. Asimismo se presentan diferencias entre los PCGA colombianos y las reglas de contabilidad del ente regulador del mercado de valores. Los siguientes son ejemplos de las diferencias que se observan entre las normas contables establecidas en el decreto 2649 y las expedidas por la Superintendencia de Valores:

- Los ajustes por inflación se deben aplicar de manera integral y no según los requisitos del decreto 2649 sólo para los inventarios, y los estados financieros del año anterior se deben convertir a precios del año corriente.
- Se requiere divulgar la información correspondiente a segmentos (de la empresa) y a operaciones discontinuadas.
- La determinación de si un contrato de arrendamiento constituye un arrendamiento operativo o financiero depende del tratamiento que se le brinde según las normas tributarias con referencia al monto de los activos al iniciar el año.
- En circunstancias específicas hay ciertos gastos que se deben diferir.
- Se disponen lineamientos específicos para la valoración de las inversiones a precios de mercado.

34. El análisis de una muestra de 20 estados financieros de compañías que cotizan en bolsa reveló deficiencias en el cumplimiento real de una serie de requisitos contables aplicables. La lista de verificación de este estudio de ROSC se preparó utilizando como base los requisitos de contabilidad dispuestos por los PCGA colombianos y las reglas contables expedidas por el ente regulador del mercado de valores. El estudio reveló el incumplimiento de las normas en diversas áreas:

- **Revelación de políticas contables.** Muchas compañías no revelaron las políticas contables exigidas en varias áreas, incluidas las de consolidación, gastos diferidos, valoración de los activos, inventarios, utilidades por acción y reserva para deudas de difícil recaudo.
- **Cuentas por cobrar.** Algunas compañías no mostraron la reserva para deudas de difícil recaudo en el estado de resultados ni en el balance general, como lo exigen los PCGA colombianos y las normas de contabilidad de la entidad reguladora del mercado de valores.
- **Inventarios.** Algunos estados financieros no revelaron el método de valoración del inventario. Algunas de las compañías de la muestra no registraron la reserva para inventarios obsoletos o de lento movimiento.
- **Patrimonio.** Muchas compañías no revelaron el número de acciones autorizadas, emitidas y completamente pagadas, o emitidas y sin pagar en su totalidad. De igual manera, no se hizo mención de los derechos, preferencias y restricciones vinculadas a cada clase de acción, incluidas las restricciones de distribución de dividendos o el reembolso del capital.
- **Estados financieros consolidados.** Algunas compañías no prepararon estados financieros consolidados de acuerdo con los requisitos de la entidad reguladora del mercado de valores y los PCGA colombianos. Las inversiones en subsidiarias se registraron utilizando el método de equivalencia patrimonial.
- **Relaciones y transacciones con partes relacionadas.** Pocas compañías con partes **relacionadas** presentaron información completa sobre sus relaciones y

transacciones con éstas en sus estados financieros. La mayoría de las compañías no divulgó el volumen de las transacciones, los montos pendientes ni las políticas de precios que determinan los negocios entre iguales entre las partes **relacionadas**.

- **Instrumentos financieros.** Varias compañías dejaron de divulgar la información exigida correspondiente a cada clase de activo financiero, tanto reconocido como no reconocido, incluida la información sobre la exposición de la empresa a riesgos crediticios. Muchas de ellas tampoco cumplieron con diversos requisitos de divulgación relacionados con los instrumentos financieros.
- **Utilidades por acción.** Varios de los estados financieros no registraron las utilidades por acción.
- **Costo de prestaciones sociales a los empleados.** Varias compañías no divulgaron cuál había sido la política contable utilizada para contabilizar el costo de las prestaciones sociales a los empleados o el carácter legal y los términos de dichos costos, incluidas las reservas para derechos adquiridos, las ganancias y pérdidas actuariales y los montos reconocidos en los estados financieros.
- **Impuestos.** La mayoría de los estados financieros no registraron los impuestos diferidos en el balance general.
- **Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera.** Varias compañías no hicieron el reconocimiento de las diferencias resultantes de la liquidación de valores monetarios o resultando de la presentación de saldos monetarios de la compañía a tasas diferentes de las inicialmente registradas, como ingresos o como gastos en el estado de resultados.
- **Eventos posteriores a la fecha del balance general.** La mayor parte de las compañías dejó de registrar información pertinente a eventos subsiguientes a la fecha del balance general.
- **Restricciones en activos fijos, pasivos contingentes y reservas.** La mayoría de las compañías no brindó información referente a los activos fijos restringidos que se habían prendado como garantía o la existencia de pasivos contingentes y de reservas.

IV. DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA

35. En Colombia no hay normas de auditoría que fijen los requisitos y lineamientos para auditar los estados financieros. En dos páginas de términos generales, el artículo 7 de la ley 43 de 1990 describe las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA colombianas) que deben acatar los auditores colombianos cuando actúan en calidad de revisores fiscales. Dado que las funciones del revisor fiscal difieren de las del auditor de estados financieros, Colombia carece de normas efectivas para la auditoría independiente de los estados financieros.

36. Los auditores en ejercicio por lo general cumplen con los requisitos de auditoría de Colombia. Debido a que no son muchos los requisitos de auditoría establecidos en la ley 43 de 1990, la conformidad con éstos no parece constituir un problema. Sin embargo, los inconvenientes surgen con respecto a las normas que se siguen al emitir un informe

sobre estados financieros. Como parte de su tarea de revisor fiscal, un auditor prepara y presenta un informe sobre los estados financieros. Este es diferente del informe de auditoría presentado cuando se auditan estados financieros.

37. En muchos de los casos los informes de auditoría preparados por los revisores fiscales no cumplen con los requisitos legales de auditoría de Colombia. Como parte del desempeño de las labores profesionales para un cliente, el revisor fiscal emite un informe de auditoría sobre los estados financieros del cliente. Varios de estos informes de auditoría, analizados como parte del ROSC de Contabilidad y Auditoría, revelaron diversas deficiencias en referencia con los requisitos colombianos, tales como las siguientes:

- El auditor no aclaró las normas de auditoría generalmente aceptadas que utilizó para auditar los estados financieros ni tampoco los principios de contabilidad generalmente aceptados utilizados en la preparación de los mismos;
- El auditor no expresó el grado de responsabilidad que asumió respecto a la información financiera del año inmediatamente anterior, presentado según una base comparativa, cuando dicho trabajo había sido realizado por otros auditores o peritos evaluadores. En uno de los casos, la opinión del auditor sobre el período anterior fue modificado sin una labor adicional de auditoría que justificara el cambio.

38. Muchos elementos importantes de los EIA se pasan por alto cuando el objetivo de la auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros. Además de actuar como revisores fiscales, algunos auditores realizan auditorías externas de los estados financieros de algunos de sus clientes. Estas auditorías externas no son requeridas por la ley, pero los clientes tratan a esta auditoría contractual como un servicio de valor agregado. Muchas de las auditorías externas presentan los siguientes inconvenientes:

- No se le presta atención adecuada al hecho de mantener la independencia del auditor,
- Hay deficiencias en la planeación y realización de los procedimientos de auditoría,
- No se cuenta con documentación suficiente,
- Hace falta un enfoque adecuado respecto a fraudes y errores,
- No se tiene suficiente conocimiento del negocio del cliente y
- Hay una exagerada dependencia de las declaraciones de la gerencia en relación con las transacciones con partes afines de la empresa.

V. CÓMO SE PERCIBE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

39. Los grupos interesados entrevistados expresaron su preocupación sobre el deterioro de la calidad de los informes financieros de las sociedades, ocasionados por la confusión que suscita la multiplicidad de fuentes de normas contables. En entrevistas y conversaciones llevadas a cabo con diferentes grupos de interés—incluidos bancos extranjeros, entidades internacionales de clasificación de valores, entidades reguladoras de bancos y de valores, personal de bolsas de valores, académicos y algunos auditores profesionales en ejercicio—se trataron los asuntos relacionados con la forma como se percibe la calidad de la presentación de los informes financieros. La falta de una obligatoriedad en el cumplimiento de las reglas se identificó como un factor importante

que impide una alta calidad en la información financiera. Se registró un consenso generalizado de que la formación universitaria en contaduría necesitaba significativas mejoras, a fin de preparar a los futuros contadores y auditores para el mundo moderno de los negocios. Varios inversionistas extranjeros y agentes del mercado de valores hicieron hincapié en que la insuficiente divulgación en los informes de ciertos asuntos pertinentes (tales como la información sobre segmentos (de la empresa); la consolidación de estados financieros; los intereses en las empresas de riesgo compartido; las reservas, pasivos contingentes y activos contingentes; las transacciones con las partes afines; los instrumentos financieros y los impuestos diferidos) afecta de manera negativa la utilidad de los estados financieros (este efecto negativo no se compensa con la tendencia que se da a suministrar demasiada información acerca de algunos asuntos de menor importancia). Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que los estados financieros de uso general están marcadamente influenciados por los requisitos de información exigidos por la administración de impuestos. Por otra parte, la falta de un concepto moderno de auditoría y la amenaza a la independencia de los auditores debido a las responsabilidades legales del revisor fiscal han suscitado serias preocupaciones acerca de la calidad de la auditoría en Colombia.

VI. RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

40. Las siguientes recomendaciones de políticas reflejan los comentarios que aportaron diferentes grupos de interés, tales como contadores en ejercicio de amplia experiencia, funcionarios gubernamentales, representantes de autoridades reguladoras, dirigentes de asociaciones profesionales de contadores, inversionistas y académicos. Las recomendaciones sobre políticas se centran en un régimen de presentación de informes financieros de las sociedades en Colombia. Se espera que estas recomendaciones se utilicen como información pertinente para la preparación y ejecución de un Plan de Acción Nacional. Algunas de las recomendaciones de políticas—por ejemplo la promulgación de la legislación pertinente—deben abordarse en forma inmediata, mientras que otras, como las relacionadas con la formación de capacidad institucional, se deben tratar a mediano y largo plazo. Las recomendaciones de este ROSC se presentan de aquí para adelante:

41. Tomar medidas inmediatas para promulgar una nueva ley que aborde los temas de la contabilidad, la auditoría, la presentación de informes financieros de las sociedades y la profesión de la contaduría en el país. La nueva ley ofrecería respaldo legal a una plataforma sólida de presentación de informes financieros de uso general y a una auditoría independiente de los estados financieros en los que puedan confiar los entes reguladores. Si estos últimos requieren información adicional, pueden entonces ordenar una conciliación simple o la divulgación de información complementaria para sus efectos reguladores. El objetivo del nuevo marco regulatorio propuesto es el de reducir el impacto de la actual multiplicidad de estructuras que rigen la presentación de los informes financieros, y no el de crear nuevas estructuras. Se deben reformar tanto el Código de Comercio como otras leyes relacionadas, eliminando las disposiciones actuales referentes a la contabilidad y la auditoría. De este modo, habría una única ley que dispondría los asuntos relacionados con la contabilidad y la auditoría, lo cual facilitaría la actualización ocasional de los requisitos de contabilidad, auditoría y presentación de informes financieros.

42. Establecer un Consejo Superior encargado de expedir las normas de contabilidad y auditoría. La nueva ley debe incluir disposiciones que faculten a un

Consejo Superior para emitir las normas de contabilidad y auditoría que reemplazarían a todas las normas y reglas correspondientes a cualquier otro organismo, para su aplicación en los estados financieros de uso general. La junta directiva de este Consejo debe incluir a representantes de alto nivel de todos los departamentos y organismos pertinentes, así como de las entidades reguladoras—por ejemplo, la administración de impuestos, la entidad reguladora del mercado de valores, el ente regulador de los bancos y las compañías aseguradoras, y la contaduría general de la nación. El Consejo debe construir una capacidad adecuada para desempeñar las siguientes actividades:

- **Hacer que se cumplan los EIC y las EIA.** La ley debe incluir las disposiciones adecuadas que le permitan al Consejo Superior adoptar oficialmente los EIC de las IFRS y las interpretaciones relacionadas del IASB como normas de obligatorio cumplimiento por ley, aplicables a la preparación de los estados financieros de las personas jurídicas, así a como los estados financieros consolidados de todas las entidades de interés público.⁵ La auditoría de los estados financieros preparados por las entidades de interés público se debe efectuar en conformidad con los EIA y con otros pronunciamientos relacionados de la IFAC. Únicamente las entidades de interés público estarían sujetas a una auditoría anual obligatoria utilizando las EIA. En el caso de estas entidades, el Consejo Superior debe adoptar plenamente los EIC de la IFRS y las EIA, sin ninguna modificación, así como preparar y divulgar la traducción oficial de estas normas. De igual manera debe ordenar el cumplimiento del Código de Ética de la IFAC para Contadores Profesionales por parte de todos los contadores públicos registrados.
- **Preparar y divulgar lineamientos sobre la implementación de los EIC y las EIA.** Para facilitar la correcta implementación de los EIC y las EIA, es preciso preparar y divulgar los lineamientos de implementación práctica de las normas. El Consejo Superior, en colaboración con el gremio de contadores profesionales del país, debe establecer un mecanismo que oriente acerca de cómo poner en práctica los EIC y los EIA en el medio colombiano. Cualquier interpretación de los EIC y los EIA se debe expedir consultando con el Comité de Interpretación de Información Financiera Internacional (IFRIC) del IASB y la Junta Internacional de Normas Auditoría y de Atestación (IAASB) de la IFAC, respectivamente. Todas las interpretaciones y demás lineamientos se deben poner a disposición inmediata de los contadores, auditores, estudiantes, profesores, entidades reguladoras y otros grupos de interés.
- **Disposiciones para la presentación de informes financieros por parte de las pequeñas y medianas empresas (Pyme).** La legislación debe establecer un marco simplificado para la presentación de informes financieros para las Pyme. Al Consejo Superior se le debe autorizar para que fije normas

⁵ Las entidades de interés público se pueden definir según la naturaleza de su objeto social, su tamaño y planta de empleados; como también por su categoría corporativa según el rango de los accionistas. Entre las entidades de interés público se puede incluir a los bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías que cotizan en bolsa y empresas de gran tamaño. A estas últimas se les puede definir así: empresas individuales y grupo de empresas que cumplan con dos de los tres umbrales—(a) número total de empleados que superen [cierto número que se debe decidir consultando con diferentes grupos de interés]; (b) activos totales en el balance que superen [un monto que se debe decidir consultando con diversos grupos de interés] y (c) facturación total que supere [un valor que se debe decidir consultando con diversos grupos de interés].

simplificadas para la presentación de informes de las Pyme, en conformidad con los EIC. Sin embargo, si el Consejo Superior considera necesario apartarse de los EIC, lo debe hacer presentando una clara explicación de los motivos correspondientes.

- **Iniciar reformas al nivel nacional para facilitar la implementación de los EIC/NIIF y las EIA.** Para poner en práctica los EIC/NIIF y los EIA se necesita un programa de reformas a largo plazo. El programa debe comprender mejoras significativas en la enseñanza de la contaduría y la auditoría; capacitación amplia y mejoramiento de los conocimientos de contadores, auditores, personal de gerencia, académicos, entidades reguladoras y otros funcionarios gubernamentales, así como formación de capacidad de varias instituciones.

43. Establecer un organismo regulatorio responsable de hacer cumplir las normas de contabilidad y auditoría y el código de ética profesional. La administración de este ente regulador no debe estar dominado por contadores en ejercicio. El organismo debe contar con suficiente personal de tiempo completo que se encargue de las actividades importantes para hacer cumplir las normas. Mediante un convenio formal con este ente regulador, los entes reguladores tanto del mercado de valores como de bancos y otras instituciones financieras deben contar con la facilidad de utilizar los diversas informaciones que produzca el organismo mencionado—por ejemplo, sobre la vigilancia y cumplimiento de obligaciones en materia de información financiera—como elementos que puedan utilizar para tomar decisiones como parte de sus propias funciones reguladoras. En la estructura orgánica del ente regulador se prevé incluir las tres unidades siguientes:

- **Otorgamiento de licencias.** El organismo regulatorio otorgaría las licencias de ejercicio a los candidatos que hubieren pasado los exámenes de idoneidad y cumplido los requisitos de experiencia práctica para trabajar como auditores independientes. El organismo regulatorio mantendría una lista de todos los licenciados en ejercicio. Especificaría los requisitos de educación profesional continuada—establecidos en conformidad con los lineamientos de la IFAC—correspondientes a los auditores independientes en ejercicio y haría cumplir dichos requisitos como condición necesaria para renovar la licencia. A ciertos intervalos periódicos, el organismo regulatorio evaluaría el cumplimiento de los licenciados en ejercicio en cuanto a la educación profesional continuada y otros factores relacionados con su desempeño profesional, incluidos, entre otros, el acatamiento de las normas de auditoría y el código de ética para auditores. Con base en esta evaluación la entidad regulatoria decidiría si renovarían o no la licencia de ejercicio.
- **Vigilancia.** Esta unidad sería la responsable de analizar e identificar el incumplimiento de los requisitos aplicables a la contabilidad e información financiera. Para este efecto, los peritos evaluarían los estados financieros de las entidades de interés público, incluidos, según el caso, los documentos de trabajo utilizados en la auditoría y los libros de cuentas de la empresa en cuestión. Si este proceso de vigilancia revela un incumplimiento material de los requisitos de contabilidad aplicables, se impondrían sanciones efectivas tanto a los elaboradores de los estados financieros como a los auditores de los mismos. En concordancia con otros entes reguladores, se establecerían disposiciones adecuadas para hacer que los gerentes de las empresas fuesen

los directamente responsables de las infracciones cometidas en los estados financieros. La posibilidad de sanciones efectivas estimularía la contratación, por parte de la gerencia de las empresas, de contadores de alta calidad y auditores con un perfil elevado que se encargasen respectivamente de preparar sus estados financieros y de auditarlos. Esta vigilancia debe desarrollar la capacidad de realizar una revisión a fondo de los estados financieros de las sociedades, con el fin de determinar hasta qué punto se están cumpliendo las normas y reglamentos—no solamente en apariencia, sino también en forma sustancial.

- **Supervisión a los auditores.** Un equipo de revisores se encargaría de revisar las prácticas de los auditores independientes y firmas de auditoría que auditan a las entidades de interés público. Se debería implantar un mecanismo eficiente y eficaz para tomar medidas disciplinarias contra los auditores y firmas de auditoría a los que se encuentre responsables del incumplimiento de las normas de auditoría y del código de ética profesional. La inspección *in situ* de los revisores se debe dedicar a evaluar las disposiciones de control de calidad aplicadas por la firma de auditoría, examinando los documentos de trabajo de ciertos trabajos de auditoría seleccionados. Por otra parte, debe haber una disposición que ordene investigar a los auditores con base en las quejas que se presenten contra ellos. El grupo dedicado a la revisión de los auditores debe desarrollar la capacidad de realizar inspecciones eficientes *in situ* de las firmas de auditoría. Aunque quizás este grupo no requiera un gran número de personas de tiempo completo, puede acudir a la ayuda de expertos adicionales externos a la institución.

44. La nueva ley conservaría los requisitos actuales referentes al revisor fiscal y debería liberar a los auditores independientes de las entidades de interés público de la responsabilidad de actividades correspondientes a la gerencia de la empresa. A los auditores independientes no se les debe pedir que efectúen actividades adicionales relacionadas con el control interno, que le corresponden a la administración y que podrían continuar quedando bajo la responsabilidad del revisor fiscal. Debería establecerse una clara distinción entre una auditoría independiente externa y otras actividades relacionadas con el cumplimiento de las normas por parte de la empresa. Estas otras actividades las podrían continuar llevando a cabo bien sea un departamento o una persona interna de la compañía, como también una firma o persona externa que actúe como revisor fiscal. Al auditor independiente externo de una entidad de interés público no se le debe permitir realizar las funciones de revisor fiscal de la misma entidad.

45. Mejorar el procedimiento de otorgamiento de licencias a auditores independientes. Con el fin de obtener una licencia de ejercicio para quedar calificado como auditor independiente, una persona debería cumplir con el mínimo de requisitos establecidos en los estándares académicos de la IFAC. Se debería modificar el sistema actual de otorgamiento de licencias sin la presentación de un examen de idoneidad profesional ni una experiencia práctica adecuada, para conformarse con las mejores prácticas internacionales. Debería administrarse un examen de idoneidad acorde con el estándar de la IFAC sobre formación profesional y también establecerse un requisito de experiencia práctica de por lo menos tres años con un proveedor de servicios de capacitación, bajo la supervisión de un auditor independiente experimentado. Para llegar a ser proveedor de capacitación autorizado una firma de servicios profesional debe contar con suficiente capacidad como para permitirle al auditor participante en el programa de

adiestramiento obtener una exposición a los aspectos prácticos de todas las normas y códigos pertinentes. La entidad reguladora, cuya responsabilidad sería la de otorgar la licencia de ejercicio, debe mantener una lista de los proveedores autorizados de servicios de capacitación práctica, y actualizarla con base en una evaluación periódica de las capacidades de los proveedores de capacitación tanto en operación como potenciales. Para la prestación de un servicio de capacitación de alta calidad dicha evaluación debe tener en cuenta el número de socios y su respectiva experiencia, la naturaleza de sus clientes y otros servicios disponibles.

46. Establecer en la ley una organización profesional de auditores independientes.

Esta organización ayudaría a desarrollar la profesión de auditoría de los estados financieros incorporando las funciones recomendadas por la IFAC y protegería el interés público reforzando la calidad de la contabilidad, la auditoría y la información financiera en Colombia. Su alcance incluiría la supervisión de los exámenes de idoneidad profesional, así como la educación y capacitación profesionales, el mantenimiento de una práctica profesional de alta calidad, la conformidad con las mejores prácticas internacionales de ética profesional y el desarrollo de la competencia Técnica de contadores y auditores. Las asociaciones profesionales vigentes deben fortalecer su capacidad de contribuir tanto al desarrollo profesional de los miembros como a las prácticas de contabilidad y información financiera en el país.

47. Ofrecer programas de capacitación sobre aspectos prácticos de los EIC y las EIA, que incluyan los retos éticos que enfrentan los auditores.

El Consejo Superior de Contaduría y la organización de contadores profesionales deben contribuir a la organización de programas de capacitación que les permitan a auditores y contadores en ejercicio familiarizarse con la aplicación práctica de los EIC, los EIA y el Código de Ética para Contadores Profesionales de la IFAC. A los profesionales en ejercicio se les debe alentar para asistir a estos programas con el fin de que cumplan con los requisitos de educación profesional continuada.

48. Impartir una nueva capacitación a los profesores universitarios y reformar el programa de estudios de contaduría.

Con el fin de asegurar que las universidades mantengan un mínimo estándar en la enseñanza de la contabilidad de la auditoría, se haría necesaria una iniciativa bien coordinada, tendiente a desarrollar el programa de estudios y la capacitación de los instructores. Se puede acordar la designación de una universidad del país para que organice actividades de esta índole. Según este acuerdo, instructores con experiencia internacional enseñarían los aspectos teóricos y prácticos de la contabilidad y la auditoría (incluyendo la aplicación práctica de las Estándares Internacionales de contabilidad y auditoría y de la ética profesional) en programas de capacitación para profesores. Asimismo se podrían establecer acuerdos para enviar a profesores universitarios seleccionados a universidades del exterior para adelantar su formación y nueva capacitación. Por otra parte, es preciso hacer un esfuerzo por reformar el programa académico de contaduría en las universidades y por ofrecerles a los estudiantes un acceso fácil a los estudios e investigaciones académicas y libros de texto adecuados, así como a los EIC y los EIA en español.

Algunas anotaciones importantes del Informe ROSC sobre la Contabilidad y la Auditoría en Colombia

Por Juan Fernando Mejía*

La Contabilidad en Colombia frente a los Estándares Internacionales: Una situación preocupante?

Cuando a un contador recién egresado o a otro cuya actuación, a pesar de su experiencia, se basa en la teneduría de los libros y en el cumplimiento de requisitos legales se le dice que es muy probable que la contabilidad, aquella que tanto esfuerzo le implica, no está respondiendo a las necesidades del mercado sino a las autoridades de vigilancia, inspección, control y fiscalización, es posible que no le sorprenda. Sin embargo, cuando se le informa que según algún estudio “la oferta de contadores públicos registrados en Colombia supera la demanda en aproximadamente el 100 por ciento”, es posible que si se sorprenda, e incluso que le preocupe. Cuando a quienes nos encontramos ejerciendo la Contaduría desde la docencia o desde la consultoría nos dicen que “el modelo contable colombiano no está respondiendo a las necesidades de los usuarios y que en la “mayoría de las empresas del país, y especialmente en las pymes, la contabilidad sólo tiene propósitos tributarios y no es vista como una herramienta para la toma de buenas decisiones financieras”⁶, nace una preocupación que invita a reflexionar más sobre estos temas, a estudiarlos más a fondo y a no quedarnos solo en las opiniones a favor o en contra de las alternativas que desde los estadios internacionales se están proponiendo en el ámbito de la globalización de los mercados y las nuevas teorías económicas.

Uno de estos estudios es el elaborado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para Colombia y los demás países miembros. Aunque fue publicado desde junio 25 de 2003, una de las dificultades que encuentran algunos contadores para explorar sus recomendaciones es que tal informe fue publicado originalmente en inglés. No obstante, algunos interesados han realizado ejercicios de resumen con el sólo ánimo de incentivar a otros para que, traducido este informe, propicien un mayor acercamiento a sus observaciones y recomendaciones.

Dicho estudio es denominado “Reports on the Observance of Standards and Codes” (ROSC) o “Informe sobre la Observancia de Estándares y de Códigos” cuyo principal objetivo es hacer un diagnóstico sobre la situación local acerca del “cumplimiento” de los **estándares internacionales en materia de Contabilidad y Auditoría, Gobierno Corporativo, y Transparencia Fiscal**.

Este informe menciona interesantes anotaciones a la contabilidad en Colombia, los cuales considero que deben ser tenidos en cuenta, no con el objeto de tomar posiciones a favor o en contra de los estándares internacionales, sino como una herramienta que puede calificarse de valiosa, máxime si se considera que puede constituirse en una “mirada desde fuera” a nuestra situación técnico contable y al de desarrollo profesional, puntos en los cuáles hace especial énfasis dicho diagnóstico.

Es evidente que la contabilidad, como lo señala Matessich, no es solo información de tipo técnico o mera reproducción mecánica de las transacciones económicas, sino que se refiere a la identificación, medición y control de la circulación de la riqueza, además que la contabilidad está en la gran necesidad de crear, mediante la investigación y la teoría, un Enramado Conceptual propio. Sin embargo, el objetivo de este corto artículo no es adentrarse en tan interesante discusión, sino mostrar a partir de una herramienta práctica –El informe ROSC-, una serie de críticas para que los contadores y las autoridades contables puedan juzgar.

⁶ Larrahondo, Martha Cecilia. Contabilidad, otro reto de cara al TLC. Periódico El País. Mayo 24 de 2005. <http://elpais-cali.terra.com.co/historico/may242005/ECO/A624N2.html>

Las Observaciones y Recomendaciones del Informe ROSC

Algunas de las afirmaciones y recomendaciones clave del informe ROSC, los cuáles llaman poderosamente la atención, respecto a la Contabilidad y la Auditoría en Colombia, sin seguir un estricto orden de exposición, son:

1. “La oferta de contadores públicos registrados en Colombia supera la demanda en aproximadamente el 100 por ciento”. (ROSC; Página 27)

Esta afirmación se basa en el hecho de que “debido a que es fácil el ingreso a la profesión de contador, en Colombia hay una gran cantidad de contadores públicos registrados”.

Es importante observar que la calificación de “fácil ingreso” a la profesión es realizada argumentando que en la actualidad los programas académicos de contaduría se orientan más a producir técnicos que contadores y auditores modernos, verdad que todos conocemos pero que en ocasiones es bueno decirlos indolentes. La proliferación de facultades de contaduría pública, el atraso en la acreditación Institucional acorde a los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, la definición de ciclos propedéuticos sólo cuando lo requieren agentes externos y otras razones de fondo son más que suficientes para que, incluso los organismos internacionales muestren una deficiencia que, como se dijo, hemos conocido pero no “reconocido”.

Aunque el mencionado informe ROSC expresa que “Se debe mejorar en forma significativa la calidad de la enseñanza de la contaduría y la auditoría “ no hace énfasis en la educación, la investigación y teoría contable sino en los elementos técnicos relacionados con los estándares internacionales.

Esta visión hacia la praxis y su interés por la tecnificación del contador se deja ver también cuando dice que “Una experiencia práctica adecuada debe ser un requisito previo para obtener el certificado de ejercicio profesional”. Esta visión técnico y tecnológica de nuestra profesión es entendible cuando se observa que el interés del informe como tal no se centra en la discusión académica sino más bien en la obtención de elementos de juicio para determinar que el modelo contable local no resiste a las exigencias de la Nueva Arquitectura Internacional, concepto al cual se hará referencia en la parte final.

2. “El modelo contable local es una adopción incompleta de los estándares internacionales de contabilidad y de los GAAP americanos del siglo anterior”.

Esta observación es de especial importancia ya que aceptarla equivale a afirmar que si bien es cierto que en la actualidad existen problemas de índole económico, social, de conocimiento y tecnológicos para realizar una adopción, también lo es que el modelo contable local es producto de sucesivas adopciones en el pasado y que no es cierto que exista un modelo contable local para defender o por lo menos que dicho modelo no es producto de un constructo teórico, académico o técnico que responda a las necesidades de los usuarios generales sino, por ejemplo, a las autoridades tributarias.

Aunque es cierto que la calidad de un estándar no se mide por el número de hojas sino por los elementos teleológicos tenidos en cuenta para su creación, el informe ROSC explica que “varias áreas de las normas contables (colombianas) que ocupan de manera pormenorizada un número extenso de hojas en los PCGA de Estados Unidos o los Estándares Internacionales Contabilidad, se redujeron en los PCGA colombianos a simples disposiciones básicas descritas en breves párrafos, sin ninguna orientación sustancial” .

Si se acepta que los contadores en el país no hemos tenido la capacidad o la voluntad de organizarnos profesionalmente, ni mucho menos, hemos logrado la pretendida nacionalización de la contaduría pública, es entonces lógico que el modelo contable local ha sido fabricado, cual vitral,

de distintas partes: normas internacionales, regulación múltiple y confusa e información tributaria; modelo que no requeriría de mayor defensa (por lo menos en materia de contabilidad privada) si además se aceptan los siguientes puntos destacables del mencionado informe ROSC.

3. “Los entes reguladores se dedican más a expedir normas de contabilidad que a hacerlas cumplir”.

Para nadie es secreto la desafortunada distancia entre lo visto en la Universidad con lo enfrentado por el contador en la práctica. Esta distancia es explicable porque la Universidad tiene como fundamento la discusión, el análisis, y sobre todo la investigación. Pero no debe olvidarse que según el concepto de I+D (Investigación y Desarrollo) estas reflexiones académicas no deben ser lejanas a la realidad del mercado. Realidad que en Colombia se limita a la presentación de informes a diferentes superintendencias con diferentes criterios, haciendo de los mal llamados “Estados Financieros de Propósito General” simples “Estados Financieros de Propósito Especial” puesto que en esencia están dirigidos a usuarios específicos: la Administración de Impuestos y las Superintendencias, o por lo menos están elaborados con los criterios o bases comprensivas por ellos dictadas.

4. “Quienes auditan dichos estados financieros tienden a favorecer las políticas contables que se han usado para determinar las utilidades gravables”

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su análisis de impacto de los estándares contables y de auditoría (CTCP, página 26), “La distinción entre las necesidades que se presumen comunes y las que se sabe son propias de cierto sector, son el motivo de que se diferencie la información de carácter general de la de propósito especial, tal cual se consagra en el ordenamiento colombiano.

Sin embargo, existe amplia evidencia documental para sostener que las autoridades colombianas no han logrado asimilar y respetar esa distinción. Es claro que dentro del trámite de autorización (previo) o de aprobación (posterior) de los estados financieros de propósito general, las autoridades han impuesto un conjunto de revelaciones que atienden fundamentalmente a necesidades de esas autoridades o de usuarios determinados. La consecuencia es una información muy abundante, no pertinente (es decir los criterios o bases comprensivas de carácter tributario o de vigilancia, inspección o control)” (He subrayado).

5. “Los requisitos jurídicos y legales del país, en lo referente a la contabilidad, no conducen a una práctica de presentación de informes financieros de alta calidad”.

Esta observación está ligada a la anterior y pretende llamar la atención en cuanto a lo que dichos organismos consideran “informes financieros de alta calidad”. Por tal se entienden aquellos destinados a usuarios cuyo propósito es la efectiva toma de decisiones y la verdadera prevalencia de la esencia de los negocios sobre la forma legal de los mismos. Por forma legal se entiende el solo cumplimiento de un requisito tal como la provisión de cartera a unos porcentajes fijos cuando, en la realidad, la esencia, es decir, el riesgo y la situación de la cartera pueden ser muy diferentes a lo obligado en la norma. Es por ello que el Informe ROSC hace un llamado a uno de los principios apelados en el estándar internacional: la revelación de los hechos financieros y económicos atendiendo a su realidad y no solamente a su forma legal.

6. Establecer un Consejo Superior encargado de expedir las normas de contabilidad y auditoría

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el informe ROSC, propenden por la creación de un Consejo Superior de Estándares Contables y de Auditoría, debido a que, según su exploración, consistente en la entrevista a destacados empresarios, contadores, autoridades, academia y otros grupos de interés, existen demasiados reguladores, más de 19 planes “únicos” de cuentas y criterios fiscales, de vigilancia, inspección o control que generan normas, en

ocasiones confusas y contradictorias, cuyo resultado es el “deterioro de la calidad de los informes financieros” para propósitos de toma de decisiones por parte de los usuarios generales. Tanto la organización normativa como profesional (léase gremial) de nuestra profesión son criticadas, tal vez con razón, en este informe de diagnóstico internacional a la contabilidad en Colombia.

7. Disposiciones para la presentación de informes financieros por parte de las pequeñas y medianas empresas (Pyme).

Esta afirmación está encaminada a derrumbar el argumento según el cual el Banco Mundial y otros organismos multilaterales estarían despreocupados por el impacto de los estándares contables internacionales en las llamadas PYME. El informe especifica que “La legislación debe establecer un marco simplificado para la presentación de informes financieros para las Pyme. Al Consejo Superior se le debe autorizar para que fije normas simplificadas para la presentación de informes de las Pyme, en conformidad con los Estándares Internacionales de Contabilidad”. A nuestro criterio, esta expresión no significa que las Pymes no deban considerar los criterios de la norma internacional en cuanto a reflejar su realidad financiera separada de su realidad fiscal, sino más bien que ello está encaminado a solicitarles legalmente menor cantidad de información, lo cual no significa que deban prepararla con criterios de “calidad” internacional.

Otros elementos del Informe ROSC

Además del componente de Contabilidad y Auditoría, el Informe ROSC se refiere al tema del Gobierno Corporativo y a los estándares relativos a la Transparencia Fiscal. Una exploración a estos componentes es importante porque ellos inciden sobre la emisión y aplicación práctica de los estándares internacionales de Contabilidad, puesto que todos estos componentes hacen parte de un contexto económico y de la llamada Arquitectura Financiera Internacional.

El gobierno corporativo implica un sistema de relaciones entre una gerencia de las compañías, los Comités Directivos, sus accionistas y sus diferentes grupos de interés (stakeholders). El establecimiento de reglas claras de juego para las relaciones interinstitucionales también depende del ambiente legal, regulador, e institucional del país. En Colombia, las leyes para la protección del pequeño accionista y de otros Grupos de Interés se han quedado cortas frente a los requerimientos de las nuevas realidades económicas, sin embargo, una profundización en este tema escapa al alcance de este artículo. El componente de transparencia fiscal pretende que el papel y la responsabilidad del gobierno en la economía sea claro para los agentes, que la publicidad de sus actividades sea uno de sus objetivos, que la preparación del presupuesto, su ejecución, y divulgación se emprendan de una manera abierta; y que la información fiscal se elabore con estándares de calidad ampliamente aceptados y que además puedan ser sujetos a procesos independientes que aseguren su integridad.

Conclusiones:

Como un intento de respuesta a las crisis financieras mundiales, los organismos multilaterales de Crédito, los creados en el marco de los pactos económicos mundiales (como la Organización Mundial del Comercio -OMC-), las Naciones Unidas y, en general, las autoridades de los llamados países desarrollados, crearon el concepto de Nueva Arquitectura Financiera Internacional.

Uno de los elementos claves de este concepto es la adopción de códigos (estándares) de conducta, mejores flujos de información, y fortalecimiento de la supervisión y la regulación financiera, cuyo propósito es incrementar la transparencia, no solo de los mercados sino también de la información disponible para la toma de decisiones públicas e internacionales que no se alejen, por lo menos en teoría, de los instrumentos para la protección de los derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas, en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En Colombia y en el mundo se ha generado desde hace algunos años, un interesante debate en el cual existe algún consenso en cuanto a la necesidad de adoptar códigos internacionales de conducta en materia fiscal, monetaria y financiera, principios adecuados de manejo corporativo, estándares contables más acordes a las transacciones y flujos del mercado, mayor disponibilidad y transparencia de la información sobre políticas y datos económicos y financieros, y mejor supervisión y regulación. Según los conceptos de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, este elemento debe incluir estándares internacionales que permitan combatir el lavado de dinero y activos, así como la corrupción y la evasión tributaria.

Como parte de los informes sobre la observancia de la iniciativa de los estándares y de los códigos (ROSC), el banco mundial emitió un estudio diagnóstico del estado de la Contabilidad y la Auditoría en Colombia sin hacer énfasis en los componentes académicos, teóricos o de investigación relacionados con la contabilidad. Este informe de enfoque práctico encontró serias deficiencias en el modelo contable local, en la estructura y organización de la profesión y emitió algunas recomendaciones que si bien, no tienen el carácter vinculante (coactivo), sí se constituyen en mecanismos de intervención en los mercados y asuntos internos debido a su poderío en la diplomacia y la política internacional. Pero también se afirma en este artículo que dicho informe se constituye en una posibilidad de reflexión frente a la necesidad de estudiar los estándares antes de emitir opiniones políticas sobre los mismos y de emprender algunas reformas que pretenden que la contabilidad pase de un paradigma legalista a un paradigma economicista que hace énfasis en la utilidad de la información contable para la efectiva toma de decisiones financieras, acorde al modelo económico imperante.

El Informe ROSC en inglés puede verse en la página del Banco Mundial y en algunas páginas locales en su versión en Español, según lo indica la Bibliografía.

Nota: El artículo y las opiniones aquí son del autor, no comprometen a las entidades con las cuáles el autor tenga o haya tenido alguna relación.

*** Juan Fernando Mejía**

Ex Consultor Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- en la investigación para la armonización del Plan General de Contabilidad con las Normas Internacionales emitidas por IFAC
Contador Público Universidad de Antioquia,
Consultor Contaduría General de la Nación, Bogotá, D.C.
Docente Universitario
jmejia@contaduria.gov.co

Bibliografía

Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). Colombia. Accounting and Auditing. [en línea]. Banco Mundial., julio 25 de 2003. Consultada el 15 de febrero de 2004. Disponible en http://www.worldbank.org/ifa/rosc_colombia.htm

Análisis de la Implementación de Estándares de Contabilidad y Auditoría en Empresas de Interés público en Colombia. [en línea]. Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bogotá, D.C.: 2004. Consultada el 10 de diciembre de 2004. Disponible en <http://www.jccconta.gov.co/portallct.html>

Vásquez Tristancho, Gabriel. Debilidades De la Regulación Contable en Colombia. En: Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, número 13. Bogotá, D.C.: Legis Editores S.A., Abr.-Jul., 2002 pp 7-12

Informe sobre la Observancia de Estándares y de Códigos (ROSC). Colombia. Contabilidad y Auditoría (En Español, Traducción Libre por Juan Fernando Mejía). [en línea]. Banco Mundial., julio

25 de 2003. Consultada el 15 de febrero de 2004. Disponible en
<http://www.juanfernandomejia.8m.com>